



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20164010066845 DEL 21/12/2016**

**“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**

**LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (E)**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de GARZÓN del Departamento de HUILA, es de categoría 6 y como no fue prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010060205 del 21 de octubre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de GARZÓN Departamento de HUILA, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

*“Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”*

La Resolución No. SSPD 20164010060205, se notificó personalmente el 27 de octubre del 2016, al alcalde municipal de GARZÓN.

Que el ente territorial, mediante documento radicado en esta Entidad bajo el número SSPD 20165290762882 del 8 de noviembre del 2016, presentó oportunamente recurso de reposición en contra la resolución de descertificación.

Que con el memorando No. SSPD 20164000108393 del 9 de noviembre del 2016, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E), se declaró impedido para decidir sobre el recurso de reposición que presentó el Municipio de Garzón frente a la resolución de descertificación expedida dentro del proceso de certificación del SGP – APSB de la vigencia 2015, informando que un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad le manifestó un interés particular directo en la decisión que se adopte frente al recurso en comento.

Por tal motivo, el trámite del recurso de reposición se suspendió de conformidad con lo señalado en el artículo 12 del C.P.A.C.A, desde la manifestación del impedimento hasta su decisión.

Ahora bien, el Despacho del Superintendente de Servicios Públicos, como autoridad competente para dirimir el impedimento, estimó necesario decretar un periodo probatorio mediante el auto No. 20164010020476 del 2 de diciembre del 2016, a fin de indagar sobre los hechos expuestos en el memorando en comento.

Que el día 5 de diciembre del año en curso, el alcalde del Municipio de Garzón, bajo el radicado No. 20165290830462, allegó a la SSPD la respuesta al auto de pruebas, con lo cual el señor Superintendente, procedió a pronunciarse sobre el impedimento que nos ocupa, mediante la Resolución No. SSPD 20161000065865 del 16 de diciembre del 2016, concluyendo la imposibilidad de establecer la existencia del interés particular deprecado, por lo cual resolvió:

***“Artículo 1. DECLARAR INFUNDADO, por las razones expuestas en el presente acto administrativo, el impedimento propuesto por JULIAN DANIEL LOPEZ MURCIA, en su calidad de Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E), para actuar y tomar decisiones "...en relación con el trámite del recurso de reposición presentado por el Municipio de Garzón, del Departamento del Huila, en contra de la Resolución No. SSPD-20164010060205 del 21/10/2015 "Por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP-APSB, correspondiente a la vigencia 2015", respecto del mencionado municipio".***

Así las cosas, este Despacho procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por el representante legal del Municipio de Garzón, en los siguientes términos.

## **2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN**

**2.1** Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

### ***“II. CONSIDERACIONES DERECHO***

*Una vez revisada la documentación remitida por nuestra entidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015, encuentra lo siguiente, respecto del aspecto calificado como **NO CUMPLE** por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo siguiente:*

*La certificación emitida para los fines señalados con anterioridad señala:*

***“Que el Municipio de Garzón - Departamento del Huila, mediante Decreto 071 de Junio 30 de 1996 adoptó la ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON, mediante el Decreto 093 de septiembre 10 de 1996 y 109 de 2001 ACTUALIZÓ Y ADOPTO LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE LOS ACTUALES Y NUEVOS CENTROS POBLADOS Y DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GARZON, que en la vigencia 2015 y en la actualidad está conforme a la metodología nacional vigente.”(Subrayas fuera de texto).***

*Que la norma anteriormente referida, al respecto señala:*

***“(iii) Reporte en el SUI de lo certificación expedida por lo Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida”***

*Que de conformidad con la información que se logró obtener por parte del personal encargado en nuestro municipio de realizar el cargue y verificación de lo información requerida a través del aplicativo INSPECTOR, encontrando que la certificación aludida en la norma en cita se reportó el día 28 de abril hogaño y que a la fecha aparece en estado de verificación.*

*Que en el proceso de validación de la documentación se requirió a la administración municipal en aras de que se estableciera de manera puntual que la certificación anteriormente referida aplicaba para la vigencia 2015, situación que fue advertido y subsanada en su momento, para lo cual se allegó la iterada certificación. Que sin lugar a duda, encuentra la administración municipal que es clara la certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación de nuestro municipio, el cual manifiesta de manera puntual que para la vigencia fiscal 2015 y en la actualidad se adoptó la metodología nacional vigente en materia de estratificación socioeconómica.*

*Que si bien es cierto se utiliza indistintamente el término adoptó en vez del vocablo aplicó, encuentra el*

*suscrito que la connotación de la misma no fluctúa con uno u otro, máxime si se recurre a la hermenéutica jurídica donde se puede inferir fácilmente que a partir de la adopción se entra a dar aplicación de la misma; sin embargo y con el ánimo de zanjar diferencias, hemos de anexar los documentos correspondientes donde se evidencia que se dio aplicación a la metodología Nacional en materia de estratificación socioeconómica.*

*Que no encuentra asidero alguno la administración del Municipio de Garzón para concluir que nuestro municipio faltó al deber legal o que por lo menos de manera residual se sustrajo de la obligación establecida en el Decreto 1077 de 2015 en materia de reportes al Sistema Único de Información.*

*Ahora bien, respecto de las actuaciones surtidas por parte de nuestra administración hemos de señalar que podría estarse ante una probable indebida interpretación por parte del operador jurídico, con respecto de la certificación emitida por el Secretario Técnico del comité permanente de Estratificación - STCPE, toda vez que ésta cuenta con la descripción jurídico/técnica de la metodología de estratificación socioeconómica adoptada por nuestro municipio.*

*Así las cosas, las certificaciones emitidas señalan las normas municipales en las cuales se ha incorporado la metodología nacional en la materia, de manera que ésta pueda ser aplicada dentro del territorio que comprende el municipio de Garzón.*

*Igualmente se debe puntualizar que la metodología Nacional aplicable no ha sufrido modificación alguna, lo que sin el más mínimo nivel de hesitación nos ha de llevar a concluir que se encuentra vigente y en pleno rigor.*

*En el mismo sentido se debe señalar que considera importante la administración municipal que se tenga en cuenta la parte final de la certificación emitida por el STCPE, toda vez que genera la sensación de que ésta ha sido desestimada por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dejando claro que dicha ratificación se hizo a solicitud de la misma.*

*Que se ha brindado la claridad suficiente al respecto por parte del Municipio de Garzón, para determinar el cumplimiento objetivo del deber legal señalado previamente y que por cuestiones de forma y no de fondo se está tomando una decisión que a todas luces es contraria a los intereses de éste, pretermitiendo de manera flagrante el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal, lo que ineludiblemente constituiría una vía de hecho por exceso ritual manifiesto sobre el cual se ha manifestado la H. Corte Constitucional señalando:*

*"En conclusión, el defecto procedimental por "exceso ritual manifiesto" se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial."*

*Para el caso que nos ocupa, si bien es cierto la obligación impuesta por la norma es precisa en señalar las condiciones de la misma, no se puede deprecar de manera absoluta e inflexible un incumplimiento de ésta, cuando se ha procedido a dar claridad suficiente sobre la situación objeto de duda por parte de la entidad encargada.*

*Colofón de lo anterior, solicitamos se valore de manera integral la documentación aportada, la cual efectivamente señala el acogimiento a la metodología aplicada a nivel nacional para el sistema de estratificación socioeconómica en nuestro municipio para la vigencia 2015, la continua en vigor para la presente vigencia y que denota el cumplimiento de la normatividad reguladora de la materia."*

## **2.2. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con el radicado bajo el No. 20165290762882 del 8 de noviembre del 2016, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que fueran tenidos en cuenta como pruebas:

**2.2.1.** Certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, la cual hace constar que en el Municipio de Garzón se aplicó la estratificación conforme a los lineamientos de la metodología nacional establecida en la vigencia 2015.

**2.2.2.** Certificación expedida por el Gerente de Empresas Públicas de Garzón EMPUGAR E.S.P., en la cual hace constar que en el Municipio de Garzón se aplican los subsidios y las contribuciones, conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 030 del 21 de diciembre del 2012.

**2.2.3.** Acuerdo Municipal No. 039 del 21 de diciembre del 2012, por medio del cual se definen los subsidios y las contribuciones.

**2.2.4.** Noventa y seis facturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Los anteriores documentos en su valor integral se anexan al expediente.

### 3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**3.1 Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”.**

El Municipio de Garzón no cumplió éste requisito, toda vez que reportó en el SUI el 28 de abril del 2016, una certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, que no proporciona una respuesta clara de cara a la exigencia normativa; por tal razón se decretó un periodo probatorio mediante el auto No. 20164010019926, sin embargo en respuesta al mismo el municipio allegó un documento que tampoco atendía lo requerido por la norma.

Al respecto señala el recurrente, que si bien en las certificaciones aportadas se utilizó el término adoptó en vez de aplicó, encuentra que la connotación de la misma no fluctúa con uno u otro, pero que con el ánimo de zanjar diferencias anexa los documentos correspondientes, donde se evidencia que se dio aplicación a la metodología nacional en materia de estratificación socioeconómica.

También señala, que no encuentra asidero alguno para concluir que el Municipio de Garzón faltó al deber legal, que más bien podría estarse ante una indebida interpretación por parte del operador jurídico respecto de la certificación emitida por el Secretario Técnico del Comité permanente de Estratificación, porque las certificaciones emitidas señalan las normas municipales en las cuales se ha incorporado la metodología nacional en la materia, de manera que ésta pueda ser aplicada dentro del territorio que comprende el Municipio de Garzón.

De igual manera, solicita que se tenga en cuenta la parte final de la certificación emitida por el STCPE, toda vez que considera que ésta ha sido desestimada por parte de esta Superintendencia.

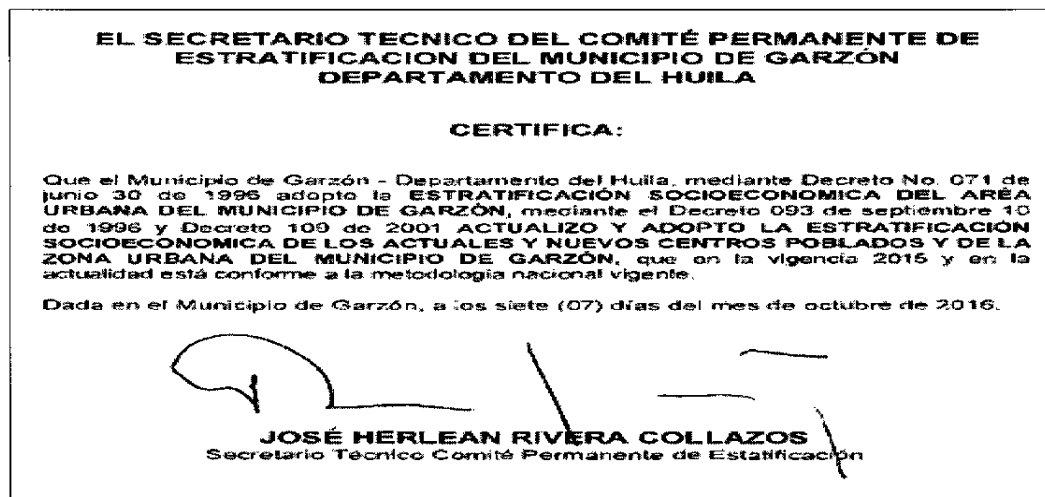
Finalmente, manifiesta que se ha brindado la claridad suficiente por parte del Municipio de Garzón, para determinar el cumplimiento objetivo del deber legal señalado previamente y que por cuestiones de forma y no de fondo se está tomando una decisión que a todas luces es contraria a los intereses de éste.

Ahora bien, este Despacho considera adecuado iniciar el análisis de los argumentos del recurrente, verificando qué documentos fue los que allegó el ente territorial, que llevó a calificar como incumplido el requisito que hoy se discute, encontrando lo siguiente:

Certificación reportada en el aplicativo Inspector del SUI, el 28 de abril del 2016.



Así mismo, en respuesta al auto de pruebas No. SSPD 20164010019926, el alcalde allegó el siguiente documento:



De las imágenes precedentes, es claro concluir que los documentos allegados certifican los Decretos mediante los cuales se adoptó la estratificación urbana y de los centros poblados del Municipio de Garzón y que los mismos en la vigencia 2015 se ajustaron a la metodología nacional vigente; sin embargo pese a que para el recurrente fue indebida la interpretación de este Despacho, no es posible entender de las afirmaciones en ellas consignadas, que la estratificación aplicada en la vigencia 2015, estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

El requisito consagrado en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 del 2015, es inequívoco al señalar que para acreditarse requiere que el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación, certifique que la estratificación aplicada para 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida, toda vez que constituye función del Comité Permanente de Estratificación velar por la adecuada aplicación de las metodologías de estratificación y esa es la razón por la cual el Decreto 1077 estableció que es el llamado a expedir tal certificación.

Pues bien, frente a este interrogante la respuesta puede ser positiva o negativa, toda vez que una cosa es que el Decreto de estratificación se ajuste a las normas que rigen la materia y otra que la estratificación se haya aplicado en el año 2015 de acuerdo con la metodología nacional, ya que existe divergencia entre adoptar y aplicar, por eso el mismo Decreto 1077 del 2015 separa estos términos en dos requisitos diferentes, es así como el aspecto denominado "*Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida*" contentivo de tres exigencias a saber, requiere en primer término el reporte del Decreto de adopción y seguidamente el reporte de la certificación que versa sobre la aplicación.

En este entendido, resulta claro que las certificaciones objeto de revisión no satisfacen lo requerido por la norma, toda vez que certifican una cosa distinta a la solicitada.

No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que el Municipio de Garzón demostró una clara intención de cumplir con este requisito, como quiera que desplegó sus esfuerzos a fin de acreditarlo con oportunidad, gestión que este Despacho no desconoce, razón por la cual se considera pertinente evaluar la certificación allegada con el escrito de reposición, veamos:



Es indiscutible que esta última certificación, en efecto, procura una respuesta positiva de cara a la exigencia normativa, porque hace constar con claridad que la estratificación aplicada en la vigencia 2015 en el Municipio de Garzón, estuvo conforme a la metodología nacional.

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 228° de la Constitución Política, que demanda la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y en virtud del principio de eficacia establecido en el artículo 3° del C.P.A.C.A., este Despacho estima que la certificación allegada con el recurso de reposición aclara y complementa la información reportada con oportunidad, por lo cual es pertinente tener como cumplido este requisito, por las razones expuestas.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T – 268 del 2010, manifestó lo que sigue:

*“La Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Ahora bien, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.”.*

En este orden de ideas, se evidencia que el ente territorial cumplió el requisito relacionado con el reporte en el SUI de la certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación y por lo tanto, el recurso formulado por el señor Edgar Bonilla Ramírez como representante legal del Municipio de GARZÓN, prospera y en consecuencia la resolución recurrida será revocada.

### 3.2 Del recurso subsidiario de apelación.

El señor alcalde de Garzón indica en el escrito de impugnación que interpone recurso de reposición y en subsidio de apelación frente al acto administrativo No. SSPD 20164010060205 del 21 de octubre de 2016, expedido por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

Es necesario aclararle al recurrente que contra la Resolución No. SSPD 20164010060205, no procede el recurso de apelación, tal como lo señala el numeral 2, del artículo 74 del C.P.A.C.A., así:

**“ARTÍCULO 74. RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA.** Por regla general, en contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

(...)**2.** El de apelación, ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito.

*No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.”(…)* (Subrayado fuera de texto).

Es claro hasta aquí, que las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no están sujetas a ser impugnadas mediante el recurso de Apelación.

Como quiera que, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico fue delegada por la Superintendente de Servicios Públicos al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución No. 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, las decisiones que expida este funcionario en virtud de estos actos administrativos serán susceptibles solamente del recurso de reposición. Dicha delegación tiene como fundamento los Artículos 9 a 10 de la ley 489 de 1998.

Además, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 dispone que: “Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas”. Con fundamento en esta norma, se expidió la Resolución de delegación.

Al respecto la Corte Constitucional señaló: “Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de delegatario pues en el primer evento él no es delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones que toma en

*calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función".<sup>1</sup>*

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló respecto de este tema:

*"Con relación a ese preciso aspecto, es del caso poner de presente que, de conformidad con las disposiciones procedimentales generales contenidas en la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (artículos 1 a 81) y las normas que regulan los procedimientos administrativos especiales, para la procedencia del recurso de apelación se requiere la configuración de dos presupuestos, a saber: a) que exista un funcionario superior jerárquico respecto de aquel que profiere la decisión objeto del recurso, por cuanto, en atención a la naturaleza y esencia del mismo, se requiere se sea conocido y resuelto por una autoridad o funcionario que se encuentre en un nivel jerárquico superior al que emitió la decisión, y b) que la ley no haya prohibido la procedencia de tal recurso.*

*Desde esa óptica, en el presente caso objeto de examen, es evidente la ausencia del primer presupuesto exigido para la procedencia del recurso de apelación, dado que, en virtud de la delegación efectuada mediante la resolución SSPD 7605 de 23 de mayo de 2002, el Director Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigó y sancionó a la ETB S.A. ESP y materializó la respectiva decisión a través de la expedición de los actos administrativos demandados, actuación en la que obró como si fuese la autoridad delegante, esto es, el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario éste que no tiene superior jerárquico.*

*En tales condiciones, no encuentra esta Sala de Decisión que con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya violado el derecho constitucional fundamental del debido proceso, ya que dio estricta aplicación a las normas procedimentales del régimen de servicios públicos domiciliarios, por cuanto, si bien la decisión en ellos contenida fue expedida por el Director Territorial Centro - funcionario éste que tiene superior jerárquico-, lo hizo en ejercicio de una función delegada por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien dentro de la estructura de dicha entidad no tiene superior jerárquico que resuelva los recursos de apelación interpuestos contra sus decisión, lo cual hace que no se configuren los presupuestos a los que se ha hecho referencia.*

*Por consiguiente, en ningún momento se desconocieron las disposiciones contenidas en las normas que regulan los servicios públicos, ya que, con base en el artículo 113 de la ley 142 de 1998, en concordancia con los artículo 12 de la ley 489 de 1998 y 50 del C.C.A., se estableció que contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios no procede el recurso de apelación; por lo tanto, al haber actuado el Director Territorial Centro en cumplimiento de un acto de delegación emitido por el mismo superintendente, es claro que no procede el recurso de alzada por haber actuado como si fuera tal funcionario".<sup>2</sup>*

Como corolario de lo expuesto, en razón a que el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo es delegatario de funciones, los actos administrativos que dicte son susceptibles únicamente de los recursos que proceden contra las decisiones que profiera la Superintendente (delegante), y que por no tener superior jerárquico, sólo procede el recurso de reposición.

En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E),

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE** el recurso subsidiario de apelación, de conformidad con lo dispuesto artículo 74 del C.P.A.C.A

**ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR** la Resolución No. SSPD 20164010060205 del 21 de octubre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- CERTIFICAR** al Municipio de GARZÓN del Departamento de HUILA, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-372 del 15 de mayo 2002. MP Jaime Córdoba Triviño

<sup>2</sup> Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Exp. No. 2005-00847-02.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del Municipio de GARZÓN del Departamento de HUILA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente Resolución al gobernador del Departamento de HUILA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO SEXTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE**

Superintendente Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo (E)

Proyectó: Vanessa Benavides – Abogada contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: María Eugenia Sierra Botero – Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información

Carlos Andrés Bernal Casas – Abogado Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 2016401351600446E